JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL

Girardot, Cundinamarca, veintiocho (28) de septiembre del dos mil veintidós. -

REF: **Radicado:** 2530740030012022-00-0394-00
 Solicitud: ACCIÓN DE TUTELA
 Accionante: Frank Wilson Gamboa
 Accionado: Oficina Control Interno Disciplinario- Alcaldía de Girardot
Sentencia: **128 Debido Proceso**

Frank Wilson Gamboa, identificado con c.c. 79.907.985 de Bogotá, domiciliado en España, presenta acción de tutela con el fin de solicitar el amparo de su derecho fundamental al debido proceso el cual considera presuntamente vulnerado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Girardot.-

ANTECEDENTES

El accionante fundamenta la petición de tutela en los siguientes hechos:

1. El día 26 de agosto de 2022 la Oficina de Control Interno Disciplinario dependencia de la Alcaldía Municipal de Girardot, me notificó al correo electrónico que “mediante auto de la fecha ordenó CIERRE DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA, dentro de proceso de la referencia (...)
2. Así las cosas, se dispuso correr traslado al suscrito por el termino de 10 días para que presente los alegatos previos a la evaluación de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo señalado en la ley 1972 de 2019.-
3. En virtud de lo anterior, el suscrito el 1 de septiembre de 2022 cuando revise mi buzón electrónico encontré el correo antes mencionado y envié un mail informando que no tenía conocimiento del proceso, y que no había sido notificado del mismo, informando que desde hacia varios años no residía en Colombia y solicitando copia del expediente, para lo cual deje el buzón electrónico frankwgamboa@yahoo.com
4. El día 2 de septiembre de 2022, INSISTO al buzón de correo electrónico de la Oficina de Control Interno en la remisión del expediente digital de todo el proceso con No. ID 061-2019 reiterando que no tenía conocimiento del proceso porque a la fecha no se me ha notificado y que requiere las copias para ejercer la defensa de mis intereses.
5. El 6 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno me responde que el expediente se encontraba a mi disposición y que podía pasar al 5 piso de la Alcaldía por las copias, situación que no se compadece con mis derechos, pues desde el 1 de septiembre le he informado que no me encuentro en Colombia, por lo tanto, es imposible acudir para tomarlas. -
6. El 7 de septiembre de 2002, ante la respuesta de la demandada, envió correo electrónico explicando mi imposibilidad física de comparecer al Despacho en el 5 piso de la Alcaldía, mas que las herramientas tecnológicas permite hoy hacer muchos trámites, la vulneración a mis derechos fundamentales, mi preocupación porque debo pronunciarme ante un cierre de una investigación sin que pueda

- hacerlo porque no conozco el proceso, y que en caso que las copias o el escáner de las mismas tengan algún valor que informen la cuenta y el monto para pagarlas.-
7. Frente a lo anterior, la oficina de control interno disciplinario, en esencia me indica que la única forma de acceder al expediente es de manera presencial y que debido a que no estaba domiciliado en el país, debía otorgar poder a un abogado para que realizara el respectivo tramite. –
 8. No me parece justo, que me indique la oficina de control interno disciplinario que debo otorgar poder a un abogado para que me represente cuando entiendo que el derecho a defenderme lo puedo ejercer de manera directa, es mi derecho como investigado, es más, requiero conocer el expediente con el fin de evaluar si debo o no contratar lo servicios de un abogado o simplemente considero que puedo ejercer mi defensa directamente , pero no debería la oficina demandada obligarme para conocer el proceso a necesariamente otorgar poder a un abogado.-
 9. Desde que tuve conocimiento del proceso solicite las copias de este, lo cual es un derecho que tengo, es más, estuve a disposición antes que me indicaran la cantidad de folios y sigo en disposición de cancelar lo que corresponda para ello, con lo cual la demanda, aunque carezca de herramientas tecnológicas puede hacerlo en un centro de copiado, pues no asumiré ninguna erogación, en a medida que cancelare lo que corresponda. -

PETICIONES

- Solicito amparar mis derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de conformidad con lo expuesto en los hechos y argumentos planteados en el presente escrito de amparo constitucional. -
- Como consecuencia de lo anterior solicito se sirva ordenar a la oficina de control interno disciplinario del Municipio de Girardot, que me remita copia integral y digital del expediente en mi contra con el radicado No. OD 061-2019 al correo electrónico del suscrito frankwgamboa@yahoo.com
- En virtud de la violación de mis derechos, solicito ordenar a control interno disciplinario del Municipio de Girardot, que los términos para presentar mis alegatos de conclusión, se suspendan desde el 1 de septiembre de 2022 y se reinicien nuevamente, cuando me entreguen de manera efectiva copia de todo el expediente disciplinario para ejercer mi derecho a la defensa.-

DERECHO FUNDAMENTAL SUPUESTAMENTE VIOLADO POR LA ACCIONADA

Alega el accionante que le han violado los siguientes derechos:

Derecho debido proceso. –
Derecho defensa

TRAMITE:

A este despacho correspondió la presente acción por Reparto del 16 de septiembre de 2022, y por auto de la misma fecha, se ordenó dar trámite de

ley, oficiando al ente accionado a efecto que se pronuncie sobre los hechos expuestos por la accionante. -

COMPETENCIA

Es competente este Despacho para conocer de la presente acción, en desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 86 de la Constitución Política, y de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, inciso tercero del numeral del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, y se está emitiendo fallo dentro del término perentorio y preferencial de diez (10) días, previsto en el inciso 4° de la citada disposición constitucional y en el artículo 15 del Decreto en mención.

ASPECTOS FORMALES

La solicitud se acomoda a las exigencias de los artículos 13 y 14 del decreto 2591 de 1991.-

Establece en el artículo 86 de nuestra carta política: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quién actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por lo acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

"... Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

La tutela tiene dos de sus caracteres distintivos esenciales, los de la subsidiaridad y la inmediatez, el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación inmediata urgente que se hace preciso suministrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a la violación o amenaza.

De igual manera la Honorable Corte Constitucional, en reiterados fallos de tutela, ha dicho: “La acción de tutela ha sido instituida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental (..)”

PROBLEMA JURÍDICO:

En el presente caso, deberá establecer el Despacho, si la accionada le ha vulnerado los derechos constitucionales fundamentales de la accionante, al debido proceso y a la defensa.-

Para resolver el problema jurídico, sea lo primero en considerar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, estos son: la subsidiariedad y la inmediatez. Sobre el primero conforme al artículo 86 de la Constitución Política que dice que la Acción de tutela “**solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable**”, la Corte ha establecido que la tutela no tiene por objeto desplazar los diferentes mecanismos judiciales de resolución de conflictos establecidos en el ordenamiento jurídico, sino que la misma debe ser utilizada como último recurso en consideración al carácter subsidiario de la acción, para proteger derechos fundamentales.

En este evento, deberá el Juez Constitucional realizar un examen sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa judicial, pero el examen no puede restringirse a establecer si dicho medio puede resolver con prontitud el conflicto, puesto que de ser así, la tutela por los principios que la rigen y por los términos establecidos para decidir, desplazaría por completo las demás jurisdicciones y acciones, en este sentido, el análisis debe centrarse en determinar si el Juez Ordinario puede ofrecer una solución al conflicto que sea clara, definitiva y precisa, en la Sentencia SU -1070 de 2003, la Corte manifestó lo siguiente:

“3.2. En los eventos en que el ordenamiento jurídico tenga previsto un mecanismo ordinario de defensa judicial, la jurisprudencia constitucional

tiene definido que el juez de tutela tendrá en cuenta, a partir de las consideraciones especiales del caso, dos aspectos a saber: 1º) la eficacia e idoneidad del medio de defensa judicial; y, 2º) los elementos del perjuicio irremediable.

El medio ordinario de defensa judicial debe ser eficaz e idóneo para el amparo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Tal grado de eficacia se aprecia en concreto, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante y de los derechos constitucionales involucrados.

Para la Corte, “La necesidad de tener presente las circunstancias concretas y los derechos constitucionales involucrados, a efectos de analizar la eficacia del otro medio de protección judicial, explica el carácter subsidiario de la acción de tutela, que impone establecer si el ordenamiento jurídico no ha dispuesto un remedio judicial idóneo y específico para proteger el derecho. Por lo mismo –carácter subsidiario-, la tutela no tiene por objeto desplazar los diversos mecanismos de protección, sino fungir como último recurso –y, por lo mismo, sin restricciones normativas distintas a las normas constitucionales- para lograr la protección de los derechos fundamentales. La forma en que se han desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales, puede indicar la no idoneidad de los mecanismos ordinarios”.

Respecto de la tutela como mecanismo transitorio ante la existencia de otro medio judicial, la Corte Constitucional ha establecido que aquella opera para evitar un perjuicio irremediable, y sobre este ha manifestado lo siguiente:

“Esta Corporación ha considerado desde sus primeras decisiones que el perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir no existirá forma de reparar el daño. La gravedad de los hechos debe ser de tal magnitud que haga impostergable la tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos; además, debe resultar urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en que se encuentra.”

Desdiciendo al caso en concreto, el problema jurídico constitucional que se presenta, se contrae en determinar si es procedente a través de la acción de tutela se ordene a la oficina de control interno Disciplinario suspender los términos para presentar alegatos de conclusión dentro del proceso disciplinario que hay en su contra hasta tanto se le envié copia del expediente.-

En lo que respecta al debido proceso, este se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, razón por la cual, las autoridades están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permiten a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, formular peticiones y alegaciones, y que, en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

La jurisprudencia constitucional lo ha definido, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, "con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción", y porque no si la misma pudo haberse considerado fuera del ámbito de la competencia de dicha autoridad.

Descendiendo al caso concreto encuentra el Despacho que conforme lo consagrado en el artículo 17 del Código Disciplinario Ley 1952 de 2019 Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causara erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales. Los sujetos procesales tendrán derecho a que se les entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y formulación de cargos y de los fallos que se profieran. Nota: (La expresión subrayada debe entenderse como pliego de cargos de conformidad con el artículo [72](#) de la Ley 2094 de 2021) el accionante Frank Wilson Gamboa debía acercarse a retirar las copias que necesitaba para dar respuesta a los alegatos de conclusión, pues conforme lo señala en el artículo en cita la autoridad municipal solo está en la obligación de allegar auto de citación a audiencia, formulación de cargos y fallos que se profieran dentro de la respectiva actuación, ahora bien, dentro de la respuestas otorgadas por parte de la accionada al mismo se le manifiesta que " en atención a su requerimiento, me permito informarle que usted puede otorgar poder a una persona de su confianza con el fin de acercarse a esta dependencia y así tomar las copias del expediente ID061-2019" así las cosas, al accionante se le brindó la orientación para que el mismo tuviera acceso al expediente y ejerciera su derecho a la defensa.-

Ahora bien, si el señor Frank Wilson Gamboa no se encuentra conforme con las actuaciones surtidas dentro del trámite del proceso disciplinario, éste puede hacer uso de los mecanismos legales idóneos para tal finalidad, esto es (Nulidades, Incidentes y Recursos entre otros) al interior del mismo, o si, a bien, lo desea una vez haya concluido la actuación disciplinaria podrá cuestionar las actuaciones disciplinarias a través de los medios de control instituidos al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, no solo se torna improcedente reclamar vía constitucional la suspensión de términos dentro del proceso disciplinario del cual el accionante tenía conocimiento desde su inicio, por la no remisión de copias del mismo, sino que además conforme las pruebas aportadas dentro de la acción constitucional no hay vulneración al derecho fundamental al debido proceso, cuando se han desarrollado todas las actuaciones de acuerdo a la ley.

Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

R E S U E L V E:

PRIMERO: Negar la petición de tutela interpuesta por Frank Wilson Gamboa, contra Control Interno Disciplinario de Alcaldía de Girardot" la y conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. -

SEGUNDO: Notifíquese este proveído conforme a lo establecido por el artículo 30 del Decreto 2591/91.

TERCERO: ADVERTIR a las partes que este fallo puede ser impugnado dentro de los (3) días siguientes a su notificación sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

CUARTO: REMITIR el expediente digitalizado a la Honorable Corte Constitucional, dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, si éste no

fuere impugnado, ello para la eventual revisión del fallo conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de Julio de 2020, en atención a las medidas de emergencia sanitaria tomadas en atención a la pandemia COVID 19.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

EL JUEZ

Firmado Por:
Jeffer Alfonso Cuello López
Juez
Juzgado Municipal
Civil 001
Girardot - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **15fcc2b8e5bb1e63a53a36b381c7535d369fdac2d646ba464bcb377409c8270e**

Documento generado en 29/09/2022 11:41:54 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>